

DARÍO VILLAMIZAR HERRERA

Debates de paz, acciones de guerra

A la violenta historia colombiana del último medio siglo deben añadirse los intentos de pacificación que, desde principios de los años ochenta, se han saldado con pequeños éxitos, continuamente reforzados por nuevas iniciativas. Aunque la violencia se recrudezca de forma periódica por la suma de acciones del Ejército, los paramilitares, los insurgentes y el narcotráfico, los elementos más organizados de la sociedad civil no cesan en proclamar nuevos esfuerzos de conciliación como única salida de “paz integral y diálogo útil”. Se pretende evitar la consumación de un proceso de autodestrucción tan lacerante, en el que muchas partes buscan legitimarse, sin que pueda apreciarse hasta dónde llega su verdadera voluntad de paz.

Muchos creen que en Colombia hay un camino transitado en la búsqueda de la paz y en la solución del conflicto político armado interno que cumple ya 50 años. Es una etapa de su historia caracterizada, en primera instancia, por abiertos enfrentamientos bipartidistas (1947-1957), por el posterior surgimiento y consolidación de diversos movimientos insurgentes (1960-1988) y, finalmente, por acercamientos, diálogos, negociaciones y, en varios casos, la concreción de procesos con la firma de acuerdos de paz (1989-1994).

Hay una parte de esa historia, inconclusa aún, que tiene que ver con variados intentos de negociación entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento Jaime Bateman Cayón y un pequeño reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), organizaciones todas que permanecen alzadas en armas y cuyos efectivos se estiman entre 11.000 y 13.000 combatientes.

Darío Villamizar Herrera es analista e investigador colombiano, director del Observatorio para la Paz. Ha publicado los siguientes libros: *Insurgencia, democracia y dictadura* (Ecuador, 1990, dos ediciones); *Colombia: narcotráfico, parte de un todo* (Ecuador, 1991); *Por unas horas hoy, por siempre mañana* (1994); *Jaime Bateman: profeta de la paz* (1995); *Aqué! 19 será* (1996, Planeta, dos ediciones); *Un adiós a la guerra* (1997, Planeta).

El conflicto político armado de Colombia se caracteriza por la longevidad y por los niveles de crueldad y deshumanización que día a día adquiere.

Con este análisis se pretende ofrecer una aproximación para entender de mejor manera el conflicto político armado que se vive en Colombia, caracterizado por su longevidad, por otras variadas expresiones violentas que se entrecruzan y retroalimentan, y por los niveles de crueldad y deshumanización que día a día adquiere. La situación también se identifica por una creciente comprensión por parte de amplios sectores de la necesidad de superarlo y lograr el entendimiento.

Una violencia irracional

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán,¹ el 9 de abril de 1948, marcó el inicio formal de “La Violencia”, período caracterizado por un agudo enfrentamiento entre conservadores y liberales. Estos últimos, en algunas regiones del país, asumieron la guerra de guerrillas y lograron conformar verdaderas fuerzas que, en muchas oportunidades, pusieron en jaque al Ejército Nacional. Se trataba de combatientes que fueron dando una perspectiva diferente a la confrontación, con amplios contenidos populares donde se priorizaba el problema de la tenencia de la tierra y la defensa de una limitada economía campesina.

El golpe militar dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, único golpe de Estado en el presente siglo, logró detener el avance de cerca de 25.000 guerrilleros que ya se habían organizado fuera de las direcciones liberales. “Paz, derecho, justicia y libertad para todos” fueron las primeras palabras pronunciadas por el nuevo mandatario. Y, efectivamente, un año más tarde había logrado la desmovilización de la mayoría de los guerrilleros del Llano, al este del país, y de otros territorios donde se encontraban bastante consolidados.

La concordia prometida por Rojas Pinilla fue de corta duración. Transcurridos apenas unos pocos meses de la expedición del Decreto 1823, que concedió la amnistía y el indulto para delitos políticos cometidos con anterioridad al 1 de enero de 1954, se procedió a combatir a fondo “los reductos de bandoleros”. En noviembre de 1954 se inició una operación de más de 9.000 soldados contra los campesinos de la región del Sumapaz en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, al centro de Colombia. Las autodefensas campesinas establecidas en esa región se transformaron de inmediato en guerrillas móviles y se constituyeron en el núcleo de lo que hoy se conoce como las FARC.

El 10 de mayo de 1957, tras la renuncia del general Rojas Pinilla, se estableció una Junta Militar que daría paso al entendimiento bipartidista conocido como el Frente Nacional, acuerdo de elites firmado en Sitges y Benidorm, en España, y gracias al cual durante 16 años, de forma excluyente y antidemocrática, el poder se repartió entre los partidos liberal y conservador. El primer Gobierno de este novedoso experimento de coalición le correspondió al liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien

¹ Político liberal que dirigió un amplio movimiento popular.

aplicó una política de rehabilitación de las extensas zonas afectadas por la violencia.

Fue precisamente durante esa Administración cuando aparecieron los primeros grupos en armas con una clara influencia de la revolución cubana. Pero a diferencia de procesos similares en otros países, en el caso de Colombia estas nacientes organizaciones conservaban lazos históricos, y hasta orgánicos, con aquellas que se habían desarrollado en los Llanos Orientales y en otras regiones del país.

Un nuevo movimiento armado

La extensa geografía e historia de los más variados grupos guerrilleros, así como sus múltiples siglas y diversos nombres, han sido divididas en dos momentos por los estudiosos del tema:

1. Una primera etapa o generación, donde aparecieron grupos de corta duración (MOEC, FAL-FUL, FUAR), que intentaron asentarse en zonas con amplia tradición de lucha campesina. Surgieron igualmente las FARC (julio de 1964), de clara orientación comunista, el ELN (enero de 1965), más cercano a la experiencia cubana, y el EPL (diciembre de 1967), de tendencia maoísta. Estas tres agrupaciones, con el paso del tiempo, fueron consolidando sus estructuras y, poco a poco, ampliando su radio de acción.
2. Hay una segunda generación en la historia de la guerrilla revolucionaria colombiana. Con una fuerte influencia del proceso político-militar centroamericano que se vivió entre 1975 y 1985, y con la participación de dirigentes y militantes salidos de los grupos anteriormente mencionados, se formaron otros nuevos grupos: el Movimiento 19 de Abril (M-19), primera experiencia de guerrilla urbana, Autodefensa Obrera (ADO), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame, el Frente Ricardo Franco y el MIR-Patria Libre. Estas organizaciones tendrían dos características: jalonarían un proceso de unidad guerrillera, expresado inicialmente en la Coordinadora Nacional Guerrillera y posteriormente en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM), y propiciarían un desarrollo militar caracterizado por una mejor infraestructura y mayor combatividad.

De estos grupos continúan en armas las FARC, el ELN, una pequeña disidencia del EPL y el Movimiento Jaime Bateman, que se dio a conocer en 1994.

Primeras aproximaciones a la paz

El Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) propició una intensificación del conflicto. La expedición del Estatuto de Seguridad, la vigencia del estado de sitio, la militarización de la vida civil, la detención de cientos de presos políticos y las violaciones de los derechos humanos generaron el reclamo

de miles de voces que pedían paz. De esa época data la conformación de la primera Comisión de Paz, presidida por el ex mandatario Carlos Lleras Restrepo.²

En Colombia los primeros pasos de negociación entre Gobierno y guerrilla tuvieron un color amarillo, debido a que las conversaciones iniciales se produjeron en una camioneta amarilla aparcada frente a la embajada de la República Dominicana, tomada por guerrilleros del M-19 en febrero de 1980. Desde entonces, el tema del diálogo entre los objetores, la solución del conflicto, en una palabra la paz, se convirtió en búsqueda recurrente. De hecho, fue el primer asunto que abordaron los candidatos a la presidencia de la República en la campaña electoral de 1982.

Belisario Betancur, presidente colombiano entre 1982 y 1986, arrancó su mandato reconociendo la existencia de causas objetivas y subjetivas que habían permitido el desarrollo de la inconformidad social y de la insurgencia. Para superarlas, Betancur propuso alcanzar la paz por medio del diálogo, presentó y promulgó un proyecto de amnistía, recompuso la Comisión de Paz, creó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), introdujo modificaciones sustanciales en políticas gubernamentales como la exterior, aceptó la apertura política y hasta se reunió con los máximos jefes del M-19.

El proceso de paz en la Administración de Betancur estuvo cruzado de modo permanente por un agudo enfrentamiento militar con los grupos alzados en armas, así como por un constante debate sobre los derechos humanos, el papel de las Fuerzas Armadas en la reconciliación y la actuación de grupos paramilitares que se estaban haciendo fuertes en el Magdalena Medio (región del centro este colombiano). Sin embargo, el 28 de marzo de 1984 se alcanzó un primer acuerdo de 11 puntos con las FARC, entre ellos la orden de cese el fuego en todos los frentes y la disposición a impulsar un amplio movimiento político.³ Un segundo acuerdo se firmó el 24 de agosto con el EPL, el M-19 y la ADO. De esta forma, una parte sustancial del movimiento guerrillero asumió la posibilidad de acceder al espacio político.

El experimento reformista vivió también profundas crisis. En esencia, no contó con el apoyo de un partido de Gobierno, no comprometió a otras instancias estatales -las Fuerzas Armadas y el Congreso, por ejemplo-, no hubo una actitud favorable de los gremios económicos, ni tampoco una voluntad real por parte de los grupos insurgentes firmantes de los acuerdos, que aprovechaban el “cuarto de hora” para darse un respiro político y militar. A partir de los trágicos acontecimientos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 ocupó sus instalaciones, quedó cerrada la posibilidad de consolidar los acuerdos firmados y sólo las FARC mantuvieron una extraña y lánguida tregua.

² Presidente liberal que gobernó entre 1966 y 1970.

³ Un año más tarde, las FARC declararon el inicio de actividades de la Unión Patriótica (UP), como movimiento político amplio integrado por militantes comunistas y de otras corrientes. Desde entonces, este grupo se convirtió en blanco de la “guerra sucia” hasta casi su total extinción tras el asesinato de cerca de 3.000 de sus miembros.

Partiendo de las experiencias anteriores, el presidente Virgilio Barco (1986-1990) organizó la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, convertida en piedra angular de una nueva estrategia para alcanzar la paz. Esta institucionalización del proceso formaba parte de su política de “mano tendida y pulso firme”, complementada con el rediseño, ampliación y fortalecimiento del Plan Nacional de Rehabilitación (creado por su antecesor), intentando solucionar problemas y necesidades de la comunidad. En septiembre de 1988 el Presidente dio a conocer su Iniciativa para la Paz, donde fijó criterios para el diálogo con la insurgencia. Un acto de guerra como fue el secuestro y posterior liberación del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, posibilitó que la paz fuera nuevamente un tema de interés nacional, otra oportunidad para buscar el entendimiento. La Iniciativa para la Paz cobijó y sirvió de marco general y particular para desarrollar el proceso de acercamiento, diálogos iniciales, negociaciones y acuerdos realizados entre 1989 y 1994.

¿Se acercaba la paz?

En medio de la peor ofensiva narcoterrorista que recuerde el país, de masacres y asesinatos masivos, de secuestros y homicidios sin precedentes y de una impresionante ofensiva guerrillera, el Gobierno de Barco se dispuso a emprender el diálogo con el M-19. En un primer encuentro se firmó un documento el 10 de enero de 1989 y, tras un intenso año de negociaciones, se consiguió la desmovilización de las estructuras del M-19, la deposición de las armas y la reincorporación a la vida civil de sus combatientes. (Ver recuadro sobre la reinserción a continuación de este artículo).

Los acuerdos firmados, la apertura política presentada en 1990, la llegada a la presidencia de César Gaviria Trujillo (1990-1994), la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente⁴ y la elaboración de una nueva Constitución Política sirvieron de ejemplo para otras organizaciones, que también adelantaron contactos y conversaciones. Todo hacía presentir la creación de un nuevo país. A la desmovilización del M-19 le siguieron las del PRT, el EPL y el Quintín Lame, organizaciones que alcanzaron una representación en el proceso constituyente. En la práctica, Gaviria había heredado de Barco su Iniciativa para la Paz, a la que adicionó una estrategia nacional contra la violencia.

En una reedición de la política de “mano tendida y pulso firme”, Gaviria entabló conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) inicialmente en Caracas (mayo de 1991) y, posteriormente, en Tlaxcala (marzo de 1992). Se trataba de lograr un entendimiento con el EPL, ELN y FARC, negociaciones que se desarrollaron en medio del conflicto y que se frustraron seis meses más tarde. Después sobrevino la guerra integral.

Pese a ello, el Gobierno de Gaviria vio florecer procesos de paz con las Milicias Populares de Medellín, la Corriente de Renovación Socialista (disidencia del ELN) y el Frente Francisco Garnica, organizaciones que negocia-

⁴ La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se reunió entre febrero y julio de 1991 y contó con una participación pluralista. La ANC cambió la Constitución de 1886.

La aguda crisis política y la filtración de dinero procedente del narcotráfico en diversas campañas políticas debilitaron cualquier posibilidad de nuevos acercamientos.

ron bajo el esquema anterior. En síntesis, se había logrado la desmovilización de ocho grupos guerrilleros y los acuerdos de paz alcanzados, que se mantienen vigentes, abarcaron a cerca de 6.000 ex combatientes. No obstante, el conflicto político armado persiste en Colombia.

La paz integral y el diálogo útil

El Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se inició con el nombramiento de un Alto Comisionado para la Paz y el anuncio de una política de Paz Integral y Diálogo Útil, con la pretensión de superar políticas anteriores circunscritas a la desmovilización de los grupos guerrilleros y a la reinserción de sus combatientes. La propuesta partió del reconocimiento del carácter político del conflicto armado y de las organizaciones guerrilleras, algo importante ante la opinión extendida de la naturaleza netamente delictiva de los insurgentes. La iniciativa estableció la disposición de negociar en mitad del conflicto y sin condiciones previas, propuso la participación activa de la sociedad civil y planteó una negociación unificada y nacional.

Bajo ese esquema, la Administración de Samper, en el centro de una gran crisis política, adelantó contactos con las FARC, el ELN y el EPL, sin lograr iniciar hasta la fecha un proceso de negociación conducente a una salida negociada. Por el contrario, los colombianos han asistido a la intensificación del conflicto armado, a su mayor degradación y al aplazamiento de una posibilidad real de paz. Al cumplirse el primer año del actual Gobierno, se produjo la renuncia del Alto Comisionado de Paz, sin que hasta la fecha haya sido reemplazado.

Entre las acciones intentadas en el marco de la política de Paz Integral y Diálogo Útil, el Gobierno Nacional realizó un proceso de negociación entre octubre de 1995 y abril de 1996 con el Movimiento Jaime Bateman Cayón, que no prosperó y que contó con la intransigencia de actores internos y externos, a pesar de haberse establecido procedimientos claros y una zona de distensión. El Ejecutivo también impulsó la humanización de la guerra, mediante el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

La aguda crisis política y la filtración de dinero procedente del narcotráfico en diversas campañas políticas debilitaron cualquier posibilidad de nuevos acercamientos. Esta situación también significó la aparición de nuevas iniciativas desde otros sectores: la Comisión de Conciliación Nacional, diversas Comisiones Facilitadoras de carácter regional, acciones de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil, muestras del anhelo nacional de paz.

El estado actual

Desde el Gobierno

A finales de marzo de 1997 fue nombrado Gilberto Echeverry Mejía⁵ como ministro de Defensa, el cuarto de la actual Administración. En las primeras

⁵ Gilberto Echeverry es uno de los miembros más destacados del llamado "Sindicato antioqueño", que reúne a un importante sector empresarial.

declaraciones, reiteradas posteriormente en su discurso de toma posesión, Echeverry planteó la necesidad de establecer una política estatal de paz expresada y desarrollada a través de una entidad llamada Consejo Nacional de Paz. Por primera vez, desde el ministerio de Defensa se hablaba de paz antes que de guerra. El anuncio sirvió para que se debatiera a nivel nacional nuevamente sobre el estado de la paz y las posibilidades reales de alcanzarla. El talante de esta propuesta generó una amplia acogida en la opinión pública. No obstante, se produjo una laguna: la ausencia de las fuerzas militares en el Consejo y su única consideración para tratar temas específicos.

Casi de inmediato, el 11 de abril de 1997, el Gobierno convocó la Cumbre Institucional de Reflexión por la Paz en la Hacienda de Yerbabuena. Los asistentes se reafirmaron en la necesidad de una solución negociada al conflicto armado en Colombia, apoyaron la formulación de una política de paz de Estado que trascendiera los límites de un Gobierno en particular y pidieron de las organizaciones guerrilleras una respuesta positiva. En la misma cita, los participantes no pertenecientes al Gobierno se manifestaron por un rápido acuerdo para la liberación de los 60 soldados retenidos por las FARC en la base militar de Las Delicias⁶ y los 10 infantes de marina también en su poder.

Sobre esta reivindicación, tras la toma de Las Delicias, las FARC se han mantenido en su exigencia de que para devolver a los soldados es necesario que el Gobierno despeje una amplia zona, que incluye el casco urbano del municipio de Remolinos, en el departamento del Caquetá. El Gobierno, por su parte, aduciendo razones de seguridad nacional, se niega a desalojar ciertos lugares neurálgicos. Ante este empantanamiento de la situación, desde distintos sectores de la sociedad se reclama la integridad y entrega inmediata de los soldados e infantes, la libertad de todos los secuestrados y el regreso de todos los desaparecidos.

Desde la insurgencia

El movimiento insurgente ha crecido vertiginosamente en los últimos años, en particular las FARC y el ELN. Muchos consideran que la capacidad militar demostrada el pasado 30 de agosto de 1996, cuando las FARC en el ataque a la base militar capturaron a 60 soldados y dieron de baja a otros 27, es el inicio de un salto cualitativo de la guerra de guerrillas a la de movimientos y posiciones. Otros analistas consideran que se trata más bien de una muestra de la reducida capacidad defensiva del Ejército y del desgaste de sus técnicas y tácticas de combate.

En medio de la agudización del conflicto, la guerrilla hace caso omiso a las nuevas voces de paz salidas del Gobierno y continúa en su dinámica de demostrar que es una importante fuerza militar y política, con capacidad continuada para desgastar y abrirse a otros espacios de enfrentamiento. En todo caso, es difícil esperar, que a poco más de un año de la culminación del

⁶ Pequeña base militar situada en el departamento del Caquetá, al sur del país.

En el centro del conflicto, entre dos fuegos, se encuentran millones de colombianos que sufren los rigores de la confrontación.

actual Gobierno, la guerrilla se siente a negociar. La única concesión posible sería la entrega de los soldados, siempre y cuando se cumpliera con sus exigencias territoriales. Frente al próximo debate electoral, previsto en octubre de 1997, la guerrilla ha manifestado que no permitirá que en sus zonas de control ingresen políticos en aire de campaña.

Desde los grupos de autodefensa y los paramilitares

A mediados de abril de 1997 los grupos paramilitares anunciaron su decisión de fusionarse en una sola organización, llamada Autodefensas Unidas de Colombia. La segunda Conferencia Nacional aprobó esa unificación y ratificó el criterio expresado anteriormente, relacionado con su disposición a sentarse a negociar en una misma mesa con guerrilla y Gobierno. Por supuesto, tal propuesta fue rechazada desde todos los sectores, incluso por un jefe guerrillero que llegó a señalar que no negociarían con personas al margen de la ley.

El paramilitarismo crece constantemente, de norte a sur, de oriente a occidente. Los departamentos de Bolívar, Córdoba, César y Sucre continúan asolados. La barbarie se extiende. Frente al próximo debate electoral, en asombrosa coincidencia con la guerrilla, los paramilitares han manifestado que impedirán la entrada de políticos con fines electorales en sus zonas controladas.

Desde la sociedad civil

En el centro del conflicto, entre dos fuegos, se encuentran millones de colombianos que sufren los rigores de la confrontación. Son los miles de desplazados, los cientos de asesinados, los huérfanos, los mutilados por efectos de las minas antipersonales, los que nunca tienen nada que ver con el conflicto. En su gran mayoría, este sector carece de representación y de atención.

La propuesta de construir una política permanente de paz en Colombia no nació con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Desde mediados del año 1996, la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) viene trabajando sobre una propuesta con tal fin. El 30 de abril de 1997 el documento fue entregado al Presidente de la República y a los distintos grupos guerrilleros.

La propuesta de la CCN está en relación directa con otras surgidas desde organizaciones de la sociedad civil: REDEPAZ, la Red de Iniciativas Ciudadanas para la Paz, conjuntamente con la Fundación País Libre, han dado a conocer su disposición para organizar -en las elecciones de octubre- un plebiscito en favor de la paz. Los Empresarios por la Paz, gestores también de la propuesta de paz permanente, señalan la necesidad de distinguir entre prioridades permanentes y prioridades necesarias, entre estas últimas apuntan la de una gestión de la paz en la que coincidan Estado, sociedad civil y comunidad internacional.

A nivel regional y local se extienden las iniciativas ciudadanas por la paz, sin que todavía constituyan un factor capaz de detener el conflicto.⁷ Desde estamentos políticos, sociales y gremiales se espera que en una eventual negociación tenga asiento la sociedad civil.

Conclusiones

El conflicto político armado en Colombia es el más antiguo del continente americano y el único aún sin solución a la vista. A menos de 1.000 días del fin del milenio no se percibe una salida. A pesar de haber transcurrido 15 años desde los primeros acercamientos entre Gobierno y guerrilla, no existe todavía una forma acertada para alcanzar el entendimiento. Pese a logros como la desmovilización de ocho grupos, la deposición de las armas de cerca de 6.000 guerrilleros y a un proceso de reinserción a la vida civil la confrontación persiste.

Diariamente crece el clamor por un fin a la guerra, por imaginar y encontrar los elementos sensatos de una posible negociación. Los actores del conflicto armado buscan legitimar sus acciones, aunque falta comprobar su real voluntad de paz. Los espectadores y víctimas de la guerra, claros en su rechazo a los violentos, pero todavía no suficientemente comprometidos con la salida pacífica, no representan aún un factor decisivo para un cuestionamiento frontal a las supuestas legitimidades de los protagonistas de la violencia.

Post Scriptum

El mundo entero conoció el proceso que condujo a la liberación de los 60 soldados y 10 infantes de Marina retenidos, en sendos ataques a las Fuerzas Militares de Colombia por parte de las FARC. Quizá no se alcanzó a percibir el profundo malestar que causó en la alta oficialidad el despeje militar de una amplia zona del departamento del Caquetá. Transcurridos varios meses de estos hechos, vale la pena hacer algunas reflexiones para tratar de prever nuevas situaciones que pudieran avivar la confrontación o trazar caminos de reencuentro:

1. En el proceso de liberación de los soldados se impuso una lógica civil en el Gobierno Nacional, contraria a posiciones militaristas que hasta pretendían un rescate por la fuerza. En la guerrilla predominó una actitud conciliadora, consciente de la necesidad de impulsar un acto humano, acorde con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en momentos en que arreciaban los ataques verbales contra la *narcoguerrilla* y la *narcosubversión*.

A pesar de haber transcurrido 15 años desde los primeros acercamientos entre Gobierno y guerrilla, no existe todavía una forma acertada para alcanzar el entendimiento.

⁷ En el municipio de Aguachica, departamento del César al noreste de Colombia, se realizó el 27 de agosto de 1995 una consulta popular propuesta por el alcalde, Luis Fernando Rincón. El tema era único: rechazar la violencia y estar de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz.

2. ¿Ganó el Gobierno con el desalojo militar de Remolinos del Caguan? Sí, por diversos motivos:

- Cumplió con la promesa de devolver sanos y salvos a los 70 soldados.
- En contra de lo que muchos pensaban, el retorno del Ejército al área desmilitarizada no se produjo en medio de actitudes violadoras de los derechos humanos.
- Pudo darle continuidad al propósito de una búsqueda de solución negociada al conflicto político interno. Para eso, encargó a José Noé Ríos (asesor especial y gestor de la liberación de los soldados) y a Daniel García Peña (Coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de Paz) que hicieran, en un plazo de 60 días, una exploración de las posibilidades de negociación con la guerrilla.
- Con el paso del tiempo, se ha consolidado un respaldo a la política de paz permanente, que cuenta con los empresarios, los partidos políticos y con un amplio conocimiento de la comunidad internacional.
- Con el transcurso de los hechos, el Gobierno ha podido desprenderse de los sectores más militaristas dentro del Ejército, menos proclives al diálogo y la negociación, como era el caso del general Harold Bedoya Pizarro, comandante de las Fuerzas Militares.

3. ¿Ganó la guerrilla, particularmente ganaron las FARC? Sí, debido a que:

- Mostró un compromiso con las normas del DIH, del artículo 3º Común y del Protocolo II. Esta demostración tiene y tendrá unas profundas repercusiones en el ámbito internacional.
- Impuso el desalojo militar propuesto desde el principio. Dentro de su lógica militar, éste es un avance, aunque no significa dominio o control territorial.

Pese a todo, su triunfo pudo ser mayor:

- Porque era el momento de darle continuidad a ese proceso, “colgándole” una etapa de acercamiento y conversaciones, sin condiciones previas.
- Porque, incluso, su “show” y su “circo” (como lo calificó el general Bedoya) pudo ser más político, menos enmarcado en las formas militares, para presentar una propuesta de negociación, un esquema del país que quieren, etc.
- Porque, en fin, los ciudadanos colombianos han mostrado, en muchos momentos y de diversas formas, al Estado, a la guerrilla y a los paramilitares, que no quieren más secuestros ni más desapariciones, que no desean ver niños en la confrontación, ni más desplazamientos de civiles de sus territorios, no más guerra, que quieren una resolución pacífica del conflicto y una Colombia próspera y en paz.

La reinserción, experiencia para el futuro

Cuando el 9 de marzo de 1990, en el Palacio de Nariño -sede del Gobierno Presidencial- dos hombres estrecharon calurosamente sus manos ante los ojos del país, se estremecieron los corazones de 30 millones de colombianos. Eran el presidente Virgilio Barco y el comandante del movimiento guerrillero M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Ése parecía ser el comienzo del fin de 40 años de conflicto armado.

¿Sueños vanos? Ciertamente no. Porque si bien en Colombia el conflicto continúa y la violencia ha adquirido nuevas formas y actores, muchos son los logros en este tortuoso camino para el reencuentro de los colombianos. Prueba de ello son las ocho organizaciones guerrilleras desmovilizadas y más de 100 mil personas beneficiadas con la firma de los acuerdos.

Una vía de reconciliación

En efecto, gracias a un proceso de casi siete años, construido día a día por el Programa para la Reinserción y las organizaciones no gubernamentales creadas por los grupos desmovilizados, se pudo aprender que una reinserción exitosa iba mucho más allá de la reincorporación individual a la vida civil. El triunfo de la reinserción requiere principalmente un reencuentro de los diferentes sectores sociales y políticos, así como gestos permanentes de solidaridad y el perdón de rencores y odios atravesados por años de enfrentamientos. Pero sobre todo, se precisa que los desmovilizados no se conviertan en grupos aislados, que como seres infectados por algún mal peligroso reciben tratamiento especial.

Después de varias pruebas e intentos sobre la base del experimento-error-éxito, con momentos muy dolorosos y otros extraordinarios, el Programa para la Reinserción y las fundaciones desmovilizadas llegaron a la conclusión de que más allá del cumplimiento del texto de los ocho Acuerdos de Paz, era necesario no sólo ampliar los beneficios a la mayor cantidad de población posible, sino además lograr cambios de actitud que llevaran a crear una cultura de paz entre los colombianos. Ésto se aprendió al entender que no podía reinsertarse una parte de la sociedad si la otra quedaba fuera, más aún después de -y en medio de- un conflicto que ya supera los 40 años y que, por lo tanto, ha dejado grandes heridas.

El éxito de la reinserción social

A través de programas educativos, sociales, de desarrollo comunitario y de proyectos de vivienda, comerciales, empresariales y agropecuarios, la reinserción ha tomado un camino más certero por las vías de la pedagogía de la paz. Y es que en Colombia se puede demostrar a diario cómo quienes en un momento fueron excelentes combatientes en la guerrilla han podido convertirse en los más grandes defensores de la paz -aunque no siempre sea fácil-, en particular frente a grandes enemigos del reencuentro que persisten en su proyecto de muerte y desolación, donde los desmovilizados se han convertido en uno de sus principales blancos.